

DEMOCRACIA, ELECCIONES, VIOLENCIA

Por Sebastián SALAZAR BONDY

Los voceros del gobierno en la prensa y en la Cámara insisten en que, durante el ejercicio del actual régimen, funciona la democracia. Sabemos que esto es cierto a medias: que se recorta la libertad de expresión (recuérdese el caso del periodista Baca Ríos como botón de muestra), que se limita el derecho de reunión, que rige ya una ley represiva, etc. Y recordemos también, dado que es el tema del día, que se halla en vigencia un Estatuto Electoral que permite el control del sufragio por el Ejecutivo —puesto que la independencia del Poder Electoral se encuentra socavada—, lo cual constituye, en puridad de verdad, un factor decisivo en la objeción que los partidos opositores dirigen a la pretendida plenitud del sistema democrático en nuestros días. Todo lo que se le reprocha al gobierno, desde la rabulesca adecuación de las leyes al interés silenciador que prevalece entre las autoridades hasta la nula acción de carácter económico y social por parte de éstas, sería franciscanamente soportable por la ciudadanía si, por lo menos, quedara abierta la posibilidad de reemplazar, mediante el voto popular libremente emitido, a los hombres del fracaso presente por otros en cuya capacidad se pudiera confiar la indispensable transformación futura. Esa esperanza, que es precisamente la que otorga al sistema democrático representativo su mejor virtud, la de probar periódicamente doctrinas y planes de acción, es cercenada por una ley electoral manosa, creada para el continuismo y la maniobra politiquera. La democracia que corean los coparticipes del régimen es de papel, y éste —se sabe desde siempre— soporta todo.

Hay, sin embargo, en este aspecto del problema peruano algo que es necesario subrayar. Cuando un grupo o partido decide, tácita o expresamente, retener el poder por simple capricho y merced a un acto pseudo-legal, se instaura la dictadura. Y la dictadura, venga de quien viniere, pero especialmente cuando se ejerce para favor de unos cuantos, es la violencia misma. La fórmula es simple como toda gran verdad: dictadura es agresión

y a la agresión sólo puede responderse con la contra-agresión, con la defensa, tanto más violenta cuanto lo es el ataque. Es evidente, pese a los comunicados oficiales, que en la dación de un nuevo Estatuto Electoral se está actuando con parsimonia, con desgano, y ello no obstante de que el proyecto que se intenta presentar es de por sí tan defectuoso como el que ahora rige. Es decir que, objetivamente, los partidos y grupos gobernantes se mueven en el sentido de disponer de la maquinaria de la elección de tal modo que resulte triunfante en 1962 el nombre previamente bendito en palacio. No es cosa que se le ocurra al articulista. Lo han dicho en "El Comercio" y en otros órganos de prensa quienes, desde uno u otro sector de la oposición, han advertido que algo se pudre en Dinamarca. Se pudre, ya lo sabemos, la democracia, en cuyo altar inciensan todos los días su aparente culto unos cuantos fabricantes de frases huecas.

Que el aroma de ese rito verbal, de dudosa fe, no estrague la pituitaria del gobierno. Pidámoslo en nombre de la paz pública. Porque también es posible advertir que en la conciencia nacional madura la decisión de no permitir que la democracia de papel sirva de suntuoso decorado a la imposición. Toda forma de fraude y coacción —la del cambiazo de urnas a la manera brutal, la del amedrentamiento del elector con las armas, la del escamoteo de la inscripción popular, la de la anulación de sufragios bajo pretextos nimios, cualesquiera, en fin, del amplio repertorio criollo— será la conversión de la lucha franca y caballeresca por el voto de las masas en una ruptura de plenas hostilidades cuya magnitud y consecuencias es imposible prever. Camus, que era partidario de la razón, señalaba que a la hora de la violencia era preciso el uso de la violencia. Lo dijo el gran ensayista francés para prevenir a todos aquellos que, cegados por la pasión, creen poderlo hacer todo con la fuerza, inclusive jugar con la democracia para servirse a sí propios y no al pueblo de la cual emana.